SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 421

7 de agosto de 2013

Presentada por *el senador Torres Torres*

Referida a

RESOLUCIÓN

Para enmendar la Sección 32.5 de la Resolución del Senado 21, según enmendada, conocida como “Reglamento del Senado de Puerto Rico”, a fin de ajustar dicha disposición reglamentaria a lo establecido en la Ley Núm. 67-2013.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Núm. 103-2006, conocida como “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”, prohibió en su Artículo 8 aprobar cualquier Ley o Resolución Conjunta que autorizara o cuya implantación requiriera la erogación de fondos públicos sin antes mediar certificaciones bajo juramento del Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y del Secretario de Hacienda sobre la disponibilidad de dichos fondos y la procedencia de los mismos. Estableció, además, que toda Comisión Legislativa que radicara un informe proponiendo la aprobación de una medida debía incluir en el referido informe una sección de “Impacto Fiscal”, en la cual certificara el impacto fiscal, si alguno, que tendría la aprobación de la propuesta legislativa sobre los presupuestos, departamentos, organismos, instrumentalidades o corporaciones públicas pertinentes. El impacto fiscal antes mencionado debía certificarse, según dispuso dicho estatuto, por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

El Reglamento del Senado de Puerto Rico, aprobado el 15 de enero de 2013 mediante la R. del S. 21, incorporó en su Sección 32.5 el requisito de que todo informe recomendando la aprobación de un proyecto de ley o resolución conjunta debe incluir la sección de “Impacto Fiscal Estatal”, según establecido en el Artículo 8 de la Ley Núm. 103-2006.

El 22 de julio de 2013, al aprobarse la Ley Núm. 67-2013, se derogó el Artículo 8 del estatuto en cuestión, bajo la premisa de que constituía un claro menoscabo de los poderes y prerrogativas otorgadas a la Asamblea Legislativa por el Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, debido a que su ejercicio del poder de aprobar legislación quedaba supeditado a la determinación de unos jefes de agencia de certificar la disponibilidad o no disponibilidad de fondos públicos.

Por tanto, es necesario enmendar la Sección 32.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico para ajustarla a lo dispuesto en la Ley Núm. 67-2013.

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda la Sección 32.5 de la Resolución del Senado Núm. 21, según
2 enmendada, para que lea como sigue:

3 “Sección 32.5 – Radicación y Contenido

4 Las Comisiones radicarán sus Informes en la Secretaría del Senado, mediante un original
5 y dos (2) copias. El original del Informe será firmado por el Presidente de la Comisión o
6 Comisiones con jurisdicción sobre el asunto, según sea el caso. Cuando una Comisión
7 proponga enmiendas a alguna medida legislativa, deberá hacerlo mediante un entirillado
8 electrónico que formará parte del Informe, y sustituirá la versión original. En caso de que la
9 Comisión no recomiende enmiendas, entonces la versión impresa de la medida legislativa
10 deberá acompañar el Informe.

11 En dichos Informes se incluirá, en el orden siguiente: el encabezamiento que identifica el
12 Informe, introducción, una exposición del alcance del Informe, las recomendaciones de la
13 Comisión y una exposición del alcance de la medida. El Informe deberá incluir, además, una
14 breve exposición de los comentarios vertidos por los deponentes o personas que hayan
15 sometido sus memoriales explicativos, así como la forma en que se atendieron las
16 preocupaciones y objeciones identificadas durante el proceso evaluativo de la iniciativa.

1 Todo Informe y su correspondiente entirillado deberá ser radicado en la Secretaría para
2 que el mismo sea tramitado de acuerdo al Reglamento y deberá tener las iniciales del
3 Presidente de la Comisión informante en cada una de las páginas. En los Informes negativos,
4 que son aquéllos donde se recomienda la no aprobación de la medida, las Comisiones
5 explicarán las razones que tuvieron para el rechazo de las medidas.

6 Todo Informe recomendando la aprobación de un Proyecto o Resolución Conjunta deberá
7 incluir una sección intitulada “Impacto Fiscal Municipal” en la que certifique el impacto
8 fiscal que tendrá el Proyecto de Ley o Resolución Conjunta y, además, cumplir con lo
9 dispuesto en la Ley Núm. 81-1991, según enmendada. **[Además, se deberá incluir otra**
10 **sección intitulada “Impacto Fiscal Estatal” donde se certifique el impacto fiscal de la**
11 **medida y las recomendaciones para atender el mismo si existe un impacto fiscal**
12 **negativo, según lo establecido en el Artículo 8 de la Ley Núm. 103-2006.]”**

13 Sección 2. – Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.